



## Asamblea General

Distr. general  
15 de junio de 2012

Español solamente

---

### Consejo de Derechos Humanos

20º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,  
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido  
el derecho al desarrollo**

### **Exposición escrita\* presentada por la Permanent Assembly for Human Rights, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial**

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[4 de junio de 2012]

---

\* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido recibida de la organización no gubernamental.

## Cuestión migratoria en la Argentina

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) saluda lo decidido por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución A/HRC/RES/17/12 por la cual extiende, por un período de tres años, el mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

En segundo lugar, considera satisfactorio el marco normativo actual que regula la cuestión migratoria en la República Argentina. La sanción de la Ley 25871 así como su decreto reglamentario, constituyen un avance en materia de reconocimiento y promoción de los derechos. Los acuerdos y declaraciones celebrados en el marco del MERCOSUR constituyen también iniciativas que ubican las políticas de Estado en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo.

No obstante, cabe señalar que el “criterio de la nacionalidad MERCOSUR”– introducido por la Ley 25871–, a los fines de admitir y procurar la regularización de migrantes provenientes del MERCOSUR, no debe tornarse en un criterio restrictivo y, por tanto, discriminatorio a la hora de la concesión de residencia y/o regularización de extranjeros que se encuentren en el territorio de la República Argentina. No hay razón de orden jurídico que permita establecer distinciones entre migrantes en virtud del origen nacional y/o regional.

Asimismo, los migrantes se encuentran con problemas para acceder a los sistemas públicos de seguridad social, en particular a pensiones no contributivas y asistenciales. Un ejemplo de ello son la Ley 13478 y el Decreto 582/03, los que establecen la pensión a la Vejez destinada a personas mayores de 70 años. En caso de ser extranjero, se requiere acreditar una residencia mínima y continuada en el país de cuarenta (40) años. Del mismo modo, la Ley N° 18.910 y el Decreto N° 432/97 instituyen la pensión por Invalidez para personas incapacitadas total y permanentemente (76 % de incapacidad laboral). Los extranjeros deben acreditar una residencia mínima y continuada en la República de veinte (20) años inmediatamente anteriores al pedido de la pensión.

La APDH comparte lo expresado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución A/HRC/RES/18/21 en cuanto a la preocupación por el hecho de que las trabajadoras migratorias del servicio doméstico se encuentran entre los grupos más vulnerables de trabajadores migratorios. En Argentina, particularmente, preocupa la situación de las mujeres provenientes de Paraguay, Perú y Bolivia, en tanto que, en su mayoría, no se encuentran en situación regular.

En este orden de ideas la APDH entiende fundamental que el Estado Argentino desarrolle programas de capacitación del personal a cargo de Migraciones, como también de las fuerzas de seguridad, militares y de frontera, funcionarios de justicia, y personal de los sistemas de educación, salud y empleados administrativos de la seguridad social. Por otra parte, considera central que el gobierno desarrolle campañas de difusión de los derechos de los migrantes y promuevan su real inclusión en las distintas esferas de la sociedad argentina.

Para finalizar, la APDH solicita al Estado Argentino el cumplimiento real y efectivo de la normativa nacional e internacional vigente en materia de Derecho de los Migrantes.